



Foto: HUGO CIFUENTES

| HUGO CIFUENTES: EL MAYOR
RETRATISTA ECUATORIANO

| INSULTO CONTRA GERÓNIMO EN ESTADOS UNIDOS
| ECUADOR: AMENAZANTE POLÍTICA PETROLERA
| EL REGRESO DE LOS MILITARES EN GUATEMALA

PLAGA DE GOBERNADORES

EN LAS DÉCADAS recientes las identidades de los pueblos se han redefinido, a través de una recuperación digna de su vocación autogestiva que les ha permitido confrontar a los gobiernos estatales, bien como enemigos acérrimos, bien como males menores o medianos con los cuales hay que lidiar. En cualquier caso la resistencia ha resultado posible y adopta tantas caras como experiencias específicas se suceden en los territorios tradicionales e indígenas. Con la actual “regionalización” de los poderes políticos y fácticos en base a un multipartidismo que mucho tiene de travestismo político, y con la generación de zonas controladas o asoladas por la delincuencia, los ejecutivos estatales se tomaron omnímodos; aparentemente descentralizados, aunque meros gerentes de alguna casa matriz.

Con descarado mercantilismo (sea económico o de imagen política), los gobernadores y sus socios van por el negocio a como dé lugar. Y los únicos enclaves donde topan escollos que los hacen trastabillar, reforzar sus mentiras y en ocasiones desistir, son las comunidades y regiones indígenas.

Con su sello de represión, corrupción, fingimiento mediático a precios millonarios e impunidad, peores gobernadores que Ulises Ruiz, Mario Marín o Zeferino Torreblanca está difícil encontrar, pero qué decir de los fantasmas que han “gobernado” estos años Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Michoacán o Jalisco.

De manera eficaz y poco transparente, los mandatarios tienen a su favor la militarización decretada por el gobierno federal, y cuentan con la docilidad del sistema de justicia, los organismos electorales, las comisiones estatales de derechos humanos, los medios de comunicación. Y por encima de todo, obedecen a los apetitos del capital nacional e internacional. De rodillas ante mineras, agroindustrias mamut, refresqueras, constructoras, hoteleras, exportadoras de energía, estos gobiernos ansían más y más superficie de sus entidades para apostarla en el demandante casino neoliberal. Pero tropiezan una y otra vez con los pueblos originarios.

En meses recientes *Ojarasca* ha registrado las resistencias a la represión y el despojo de Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Guillermo Padrés, Fernando Toranzo, Emilio González Márquez, Juan Sabines Guerrero. No importa a qué partido se adscriban, todos son por igual agentes promotores, y posiblemente socios, de la dicha inversión empresarial y sus privatizaciones correspondientes. No faltan quienes se rifan para la Suprema Enchilada, la silla presidencial.

Los pueblos nahua, yoreme, zapoteco, tzotzil, purépecha, ñahñú, i'koot, wixárika, tzeltal, amuzgo, tlapaneco y rarámuri los desafían y desnudan desde y sólo desde sus territorios mexicanos. A esos poderes abusivos de dudosa legitimidad, oponen formas de gobierno propias, mecanismos comunitarios de seguridad y resguardo, formas de producción.

Discursos y coptaciones más o menos, los nuevos gobiernos de Gabino Cué en Oaxaca, Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, Rafael Moreno Valle en Puebla, Javier Duarte en Veracruz y Eruviel Ávila en el Estado de México no parecen ir en dirección diferente a la de sus antecesores. El mercado manda, y todos siguen fieles el guión de manipular programas para dividir a las comunidades, hacerlas dependientes, corromper a sus representaciones, imponer leyes a modo, impulsar el miedo. Ahora el propio presidente Felipe Calderón les ha proporcionado el nuevo argumento de “terrorismo”, que tan buenos resultados ha dado en Chile y Colombia para criminalizar, con la venia de Washington, a las luchas indígenas y la protesta social ☿

GERÓNIMO POR BIN LADEN: INSULTO RACISTA DEL GOBIERNO DE OBAMA

WINONA LADUKE, escritora y activista anishinaabe, o chipewa, ex candidata vicepresidencial por el Partido Verde junto con Ralph Nader en dos ocasiones, y que en 2008 apoyó a Barack Obama, habló en mayo con la reportera Amy Goodman sobre el uso del nombre de Gerónimo como código militar de su país en Pakistán para referirse a Osama Bin Laden: “Es la continuación de la guerra contra los pueblos indígenas”, dijo.

El gobierno de Obama ha despertado la indignación de las comunidades de ascendencia indígena en Estados Unidos, luego de que el 1 de mayo se revelara que las tropas estadounidenses emplearon el nombre del legendario líder apache mescalero como código secreto durante el asalto en el que se asesinó al señor Bin Laden.

Gerónimo luchó contra las tropas estadounidenses y mexicanas en el siglo XIX defendiendo las tierras de las tribus fronterizas. LaDuke recordó en el noticiero *Democracy Now!*: “El ejército de Estados Unidos está plagado de términos indígenas. Están los helicópteros Black Hawk y Apache Longbow, los misiles Tomahawk. La frase que se usa cuando alguien sale de una base militar en un país extranjero es ‘salir de la reserva hacia territorio indígena’”.

Harlyn Gerónimo, bisnieto del personaje, declaró a su vez que equiparar al jefe apache con Bin Laden “es una ofensa a los pueblos originarios de América y a su líder histórico más reconocido”. Jeff Houser, a nombre de la Nación Apache de Fort Sill, exigió al gobierno una disculpa formal por equiparar a su antecesor con un asesino de masas.

Gerónimo eludió heroicamente a sus perseguidores en ambos lados de la frontera durante años, antes de rendirse en 1886 y quedar como prisionero de guerra hasta su muerte en 1909.

El tema de la insultante “codificación” de los servicios de inteligencia afloró también en una sesión del Senado en Washington sobre “estereotipos indígenas con contenido racista” (algo muy común en el deporte y las fuerzas armadas del vecino país). En dicha sesión testificó Suzan Shown Harjo, presidenta del Instituto Morning Star: “Gerónimo, el hombre, el líder y la persona, representa un modelo para nuestros niños en toda nación indígena. Produce un shock que lo comparen con un terrorista y usen su nombre para designar a un enemigo”. En Estados Unidos, “nuestros nombres no son nuestros, nos los han robado igual que nuestras tierras”.



Portada:
“Carnavalera”,
Ecuador, 1983
Foto de Hugo
Cifuentes



Gerónimo, jefe apache

Esto vino sucediendo durante años, y se oficializó con las Regulaciones de Civilización de 1880-1890 a 1930-1940, mediante la prohibición de ceremonias religiosas, la Danza del Sol y otras que fueron catalogadas como “religiosas”. Se prohibieron igualmente las actividades de sanadores o chamanes, y los pueblos originarios fueron confinados en reservas. Cincuenta años de supresión religiosa marginaron las lenguas nativas y las creencias religiosas, que pasaron a una clandestinidad de la cual muchas nunca resurgieron.

LaDuke, quien acaba de publicar el volumen *La militarización del territorio indígena* (*The Militarization of Indian Country*, Honor The Earth, Minneapolis, 2011), explicó: “Los militares tienen su propia perspectiva. Ésta fue una de las campañas más costosas para hallar a una persona, Bin Laden. Y la campaña para capturar a Gerónimo y combatir al pueblo apache fue en su tiempo una de las más costosas llevadas a cabo por el gobierno de Estados Unidos. Durante 13 años se gastaron millones de dólares en perseguirlo. Desde nuestra perspectiva, y creo la de todos los estadounidenses, Gerónimo es un héroe”. En consecuencia, el uso de su nombre en este caso representa un insulto más a los pueblos originarios de Norteamérica ☿

| **(Ojarasca**, con información de **DEMOCRACY NOW!**)

La Jornada
Directora General: Carmen Lira Saade
Publicidad: Marco Hinojosa.
Arte y Diseño: Francisco García Noriega

Ojarasca en La Jornada
Dirección: Hermann Bellinghausen
Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera
Edición: Gloria Muñoz Ramírez
Redacción: Marcela Salas Cassani
Caligrafía: Carolina de la Peña
Diseño original: Francisco García Noriega
Retoque fotográfico: Alejandro Pavón Hernández
Asesoría técnica: Francisco del Toro

suplementojarasca@gmail.com

Ojarasca en La Jornada, es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de CV. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, CP. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en *Ojarasca*, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de título: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados. Impreso en: Imprenta de Medios, SA de CV. Av. Cuilitlahuac 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

AGUA PARA VICAM

Marcela Salas Cassani

Con las clases suspendidas en todas las escuelas del pueblo, retenes militares que impiden el libre tránsito hacia Vicam y dos elementos de la guardia tradicional agredidos por la policía estatal, la tribu yaqui lleva a cabo acciones de resistencia en protesta por la construcción del Acueducto Independencia, que incluyen bloqueos intermitentes en la carretera internacional México-Nogales.

A la obra —proyecto principal del programa Sonora Sistema Integral promovida por el gobierno panista de Guillermo Padrés Elías, con la que se pretende desviar agua de la presa El Novillo hacia la capital del estado— también se oponen el Movimiento Ciudadano por el Agua y agricultores del valle Yaqui, quienes junto con el pueblo yaqui realizan acciones de desobediencia civil pacífica.

Para una región principalmente agrícola, donde se siembra trigo, maíz, frijol y cártamo, el agua es una cuestión de vida o muerte. “La intención del gobierno de Sonora de desviar anualmente 75 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca sagrada del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo con fines comerciales ha puesto a nuestra tribu y a todos los habitantes de este valle en una situación crítica”, dijo a *Ojarasca* Mario Luna, autoridad tradicional de la tribu yaqui.

De las 90 mil hectáreas aptas para cultivarse en la región yaqui, tan sólo 17 mil hectáreas están sembradas por falta de recursos hídricos para el riego. “El gobierno dice que nos sobra el agua, pero la realidad es que no hay”. “Las autoridades del gobierno”, explica Luna, “pretenden hacernos creer que ‘el pueblo de Sonora tiene sed’, y que por ello es necesario construir el acueducto. Pero nosotros sabemos que eso es sólo un pretexto, pues el agua que pretenden desviar de nuestra cuenca

no será para uso doméstico, sino para llenar una presa que se encuentra en zona industrial de Hermosillo donde se encuentran empresas como Ford, Big Cola, Apasco, la cementera más grande de América Latina, y donde próximamente se instalará la cervecería Heineken”.

Siguiendo los conductos legales que marca la Constitución, el pueblo yaqui obtuvo triunfos en el área judicial: una medida cautelar preventiva a favor de la demanda de restitución de aguas otorgada por el Tribunal Unitario Agrario 35 de Ciudad Obregón, que prohibía “el desvío de caudales de cualquier índole fuera de la cuenca del río Yaqui en tanto no hubiera sido resuelto el conflicto de aguas”, y un amparo contra la licitación del acueducto que ordena parar las obras, otorgado por un juzgado de distrito a los productores agrícolas del valle del Yaqui y ratificado por un tribunal colegiado.

A pesar de las disposiciones judiciales, la construcción del acueducto Independencia —que costará casi cuatro mil millones de pesos y tendrá una longitud aproximada de 175 kilómetros— ya comenzó y hasta el momento se han excavado 60 kilómetros de zanja y pagado 30

En un desplegado, supuestamente firmado por autoridades yaquis se “deslindaban” del Movimiento Ciudadano por el Agua y de quienes bloquearon la carretera federal. Los presuntos signatarios aseguraron que sus firmas fueron falsificadas o tomadas con engaños. “Lo que el gobierno está tratando de hacer es promover la desunión al interior de la tribu yaqui”

kilómetros de tubería, lo que significa un 40 por ciento en el avance de las obras, por lo que “el gobernador Guillermo Padrés Elías está incurriendo en desacato”, aseguró Mario Luna. Padrés Elías, al ser cuestionado sobre los oficios 6483-A y 6484-A otorgados por el juzga-

do octavo de distrito que ordenan la suspensión de la construcción del Acueducto Independencia, dijo que “no existe tal cosa” y reiteró que “la obra continuará. El desarrollo de Sonora nadie lo va a detener. Yo quiero que le vaya bien a todos los sonorenses, no a unos cuantos. Podrán decir misa”.

Medios impresos de Sonora publicaron un desplegado que supuestamente había sido firmado por autoridades yaquis en donde éstas se deslindaban del Movimiento Ciudadano por el Agua y de quienes bloquearon la carretera federal. Sin embargo, los supuestos signatarios aseguraron que sus firmas habían sido falsificadas o tomadas con engaños.

“Lo que el gobierno está tratando de hacer es promover la desunión al interior de la tribu yaqui, pero ya hablamos personalmente con los compañeros que supuestamente firmaron el documento y algunos de ellos aseguraron que no estaban enterados de la existencia del desplegado; otros dijeron que los hicieron firmar con engaños y sólo uno de ellos aceptó haberse deslindado del bloqueo carretero. Lo que quieren es que haya conflicto entre nosotros, pero no lo van a lograr, estamos unidos para defender nuestros recursos. No vamos a permitir que se venda el agua que es de la nación”, aseguró Mario Luna.

“El territorio del valle del Yaqui ha pertenecido milenariamente a nuestra tribu”, dijo Luna, “y a lo largo de los años hemos convenido con los gobiernos el paso de electricidad, poliductos, carreteras, fibra óptica y, en los últimos años, dada la generosidad y solidaridad del pueblo yaqui con sus hermanos, hemos aceptado la explotación de una batería de 17 pozos de agua que abastece por medio de un acueducto a la ciudad de Guaymas y a la zona turística de San Carlos, pero ¡ya basta!”

A pesar del impresionante operativo alrededor de Vicam Pueblo (que incluye militares y casi setenta unidades de la Policía Estatal Investigadora de Sonora, policía municipal de Cajeme y Policía Federal Preventiva) las autoridades tradicionales de la tribu yaqui de Vicam y Potam, primera y segunda cabeceras, informaron que las acciones de resistencia para evitar la privatización del agua continuarán, y aseguran que no permitirán que “se vuelvan a cometer más injusticias contra nuestro pueblo; haremos valer nuestra razón histórica como pueblos originarios de estas regiones áridas y nuestros derechos históricos” ☿



Foto: HUGO CIFUENTES

CONTRA EL ECOCIDIO CAUSADO POR LA “FIEBRE DEL AGUACATE” EN MICHOACÁN

Colectivo La Vecindad,
Uruapan, Michoacán

“**A**NTES AQUÍ TODO se daba, llovía a cántaros”. “En todas las casas sembraban maíz, frijol, durazno, de todo”. “En el tianquis era bien bonito ver a la gente vendiendo lo que cada quien sembraba. Todo esto se acabó”, recuerdan vecinos del barrio de Santo Santiago, en esta ciudad puerta de la meseta purhépecha, donde actualmente se sufren las consecuencias de lo que el ecologista Isaac Bonaparte califica como “ecocidio provocado por la ambición y la falta de conciencia de aguacateros” que han devastado más de 100 mil hectáreas de bosque en todo el estado.

Juan González Cisneros, del Congreso Nacional Indígena (CNI), advierte que por la excesiva tala de bosques para el cultivo del aguacate “esta ciudad en poco tiempo se quedará sin agua”. Por su parte, el productor aguacatero Salvador Luna Contreras, refiere que “los aguacates no producen agua, sólo consumen, y ahora las lluvias aquí sólo llegan por huracanes o ciclones”.

Son múltiples los problemas que ocasiona el monocultivo del aguacate: la tala inmoderada de pinos y encinos, el despojo a comuneros, el cambio climático, envenenamiento de los mantos acuíferos por el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes que, se ha comprobado, provocan altos índices de cáncer de mama en la población, indican investigadores, productores, trabajadores, ecologistas, campesinos y habitantes de la región.

Ubicada en el centro occidente de Michoacán, zona de transición entre Tierra Caliente y la meseta purhépecha, Uruapan es considerada la capital mundial del aguacate, característica que ha transformado el paisaje y la vida de los pobladores.

En 2007 se cultivaba aguacate en 19 municipios, pero actualmente la actividad se ha extendido a 49 demarcaciones con 10 mil 172 huertas, en las que “la mayoría de los productores hacen a un lado los fertilizantes orgánicos y usan químicos, pues estos aceleran el crecimiento del producto para una pronta

entrada de dinero y hacen a un lado el buen cuidado de la tierra”, reconoce el productor Mario Jiménez Jiménez.

José Ramírez Amezcua, biólogo del Instituto Nacional de Ecología (Inecol), explica que “sustancias como los mal llamados fertilizantes contribuyen al empobrecimiento del suelo y se acumulan en los frutos que consumimos”. El investigador agrega que “los pesticidas, prohibidos en otros países por producir malformaciones en el cuerpo humano y en animales, en México se siguen utilizando”.

“Me mandaron a llenar la pipa y al destaparla salieron unos gases que me causaron un mareo y después un salpulido; mientras otro compañero terminó caminando a gatas por la ceguera y fue a parar al hospital”, relata Oliverio Calderón Gaona, uno de los 50 mil trabajadores de las huertas en este estado. Un documental de la asociación ambientalista Guerreros Verdes, expone que el uso de plaguicidas es altamente tóxico, provoca síntomas de envenenamiento, daños físicos como deformidad, esterilidad, pérdida de memoria, daños al sistema nervioso central, cáncer, lupus e incluso la muerte.

El aguacate Hass, que se produce y comercializa en masa, es transgénico, no es originario de la región, consume mucha agua, no produce oxígeno, afecta el ecosistema, ocasiona el cambio climático y disminuye el cauce del río Cupatitzio.

“Los aguacateros ganan y perdemos todos”, lamenta Bonaparte, ganador del premio al mérito ecológico y encargado de la Comisión de Protección del Medio Ambiente, de la asociación Utopía para el Desarrollo Integral Comunitario (UDIC). “Los productores han hecho pozos clandestinos en la subcuenca del Cupatitzio para llevarse el agua a sus huertas”, denuncia el ecologista.

Salvador Luna, propietario de una huerta en el cerro de Cheranguerán, al norte de La Rodilla del Diablo, principal manantial que alimenta a la ciudad, señala que además de las huertas, las emparadoras de aguacate, como Calavo, contribuyen a la contaminación arrojando sus desechos al río. Reconoce que “el Cañón de la Guerra, afluente del Cupatitzio, ha sido contaminado por años con huertas como la

mía. Ahí bajan todos los químicos que se aplican y de eso somos responsables. Las dependencias no quieren tocar a los aguacateros con la supuesta idea de que generan dinero y fuentes de trabajo, lo que los hace intocables”.

“Es evidente que hay corrupción y omisión de las autoridades”, respecto al daño ambiental que provoca el cultivo de aguacate, insiste el ecologista Bonaparte. Un informe de Greenpeace refiere que de 1990 a la fecha se ha perdido casi el 40 por ciento de los bosques de pino y encino en los 11 municipios donde se concentra la mayor producción de aguacate.

Para realizar el guacamole más grande del mundo, Uruapan hizo a un lado las huertas de traspatio de zanahoria, plátano, lechuga, mandarina, alfalfa, café, chirimoya, jitomate y hasta la guayaba para el ate. Una ciudad con un Parque Nacional y un río como referencias obligadas, ahora es exportadora del aguacate para la fabricación de jabones, aceites y cremas de belleza. Aquí hasta las paletas y la nieve son de “oro verde”, un color que “ya no significa vida entre nosotros”, como dice Lala Ortiz, originaria del barrio de San Juan Quemado.

Antes se veían luciérnagas, mariposas, colibríes, caballitos del diablo (libélulas) y la llegada de las lluvias era anunciada por los grillos en las calles de los siete barrios de la ciudad. Ahora, además de las huertas, proliferan los viveros como el de Las Arboledas, que produce 5 mil plantas al año que se venden en Chiapas y Veracruz.

Aunque no hay resistencia organizada contra el despojo, impera el descontento de la población. “Hace 40 años el barrio de Santo Santiago luchó por la recuperación de sus tierras, sobre todo las que estaban en manos de Rafael Paz, usurero de la ciudad. Hicimos frente a la decisión de todos, pero en 1971 fue asesinado el líder Rodolfo Ávila. Ésa fue la última lucha que se hizo para recuperar las tierras, pues después de la muerte del dirigente ya nadie quiso meterse en problemas con los aguacateros. Esta historia aún la recordamos con orgullo”, rememora Carlos Medina, sobrino del líder comunal desaparecido ☞



FOTO: HUGO CIFUENTES

SUICIDIO GUBERNAMENTAL DESCONOCER LA ASAMBLEA EN OAXACA Y DESPROTEGER SU MAÍZ NATIVO

OAXACA VIVE un momento terrible de su historia. Tras la prolongada represión emprendida por Ulises Ruiz, tras la batalla por la dignidad en Oaxaca que protagonizó el pueblo oaxaqueño rural y urbano sin distinción de identidades, tras la persecución que desató el susodicho gobernador, tras la vasta descomposición que dejó en diversas regiones de la entidad (nomás miren San Juan Copala o San José del Progreso ahora), resulta que el gobierno de Gabino Cué —gobernador en quien tanta gente puso esperanzas— ha emprendido una de las más funestas y radicales reformas legislativas en la historia de la entidad.

Por una parte, siguiendo la reverberación de otras leyes que dicen defender el maíz, como la de Tlaxcala y Michoacán, Oaxaca salen con una “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca”, impulsada por una diputada del PRI y con la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca” impulsada por una diputada del PAN, a propuesta de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlícue, AC que, como afirma un buen número de organizaciones sociales, indígenas y de la sociedad civil, “agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo” y por si fuera poco “no protegen nues-

tro maíz nativo. Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”.

De aprobarse, cualquiera de ellas vulneraría “de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria”.

Tales iniciativas “le otorgan certeza jurídica sólo para *productores registrados*”, término que excluye a los campesinos indígenas que producen sus propios alimentos. “Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”. Aspectos graves son el establecimiento de “fronteras agrícolas” que “limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña”, lo que busca promover pseudo programas de conservación que impiden “la agricultura sustentable y la milpa tradicional”; el impulso a la “creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el Estado y los productores, excluyendo a los campesinos y

quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas”, y el hecho de “obligar a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a ‘mejoradores’ a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados”. Por si fuera poco, al igual que con la ley de Tlaxcala, no se prohíbe expresamente ni la siembra ni el almacenamiento, sino que se legaliza que las cabeceras municipales tomen decisiones al respecto, lo que de facto “ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como las asambleas y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales”.

Mas toda la estructura del estado de Oaxaca es atacada. El paquete de reformas constitucionales es algo que, según sus autores, “fortalece la relación entre los poderes, la cultura de la legalidad, los órganos autónomos, la participación ciudadana y la autonomía del Poder Judicial”, pero en los hechos es un ataque frontal a los pueblos indios porque “da marcha atrás a las conqui-

No protegen nuestro maíz nativo.

Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta

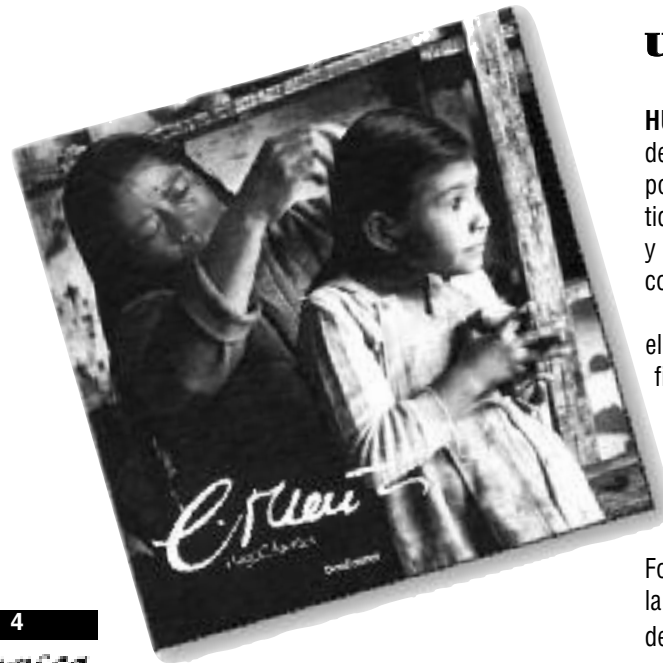
tas de la década anterior e intenta dismantelar su régimen de gobierno y socavar su autonomía. En particular, el apartado C del artículo 25 desconoce a la asamblea, órgano supremo de gobierno en cuatro de cada cinco municipios de Oaxaca, y la despoja de todo su poder de decisión. En un intento de justificar esta exclusión, se ha asimilado la asamblea al cabildo abierto, cuando se trata de dos espacios y figuras enteramente distintos”.

Como las leyes del maíz, las reformas constitucionales de Oaxaca son tramposas en su conjunto: por un lado relegan todo lo referente con la equidad de género, y por otro dicen introducir “instrumentos de la democracia participativa propuestas por la sociedad civil como el referéndum, el plebiscito y la

revocación de mandato, pero lo hace en términos demagógicos y engañosos. Crea inmensos obstáculos para su aplicación, por ejemplo al exigir 20 por ciento del padrón electoral para solicitar referéndum o plebiscito —diez veces más de lo que establece como requisito la reforma equivalente a nivel federal que acaba de aprobarse—, o al plantear procedimientos tan complejos para la revocación del mandato que podrían dilatar tanto como lo que dura el mandato que pretende revocarse. En vez de facilitar la participación ciudadana se le burocratiza, subordinando la gestión autónoma a órganos controlados por los partidos”.

Qué la tiene difícil. Son innumerables (muchas más de cien) las organizaciones que ya publicaron un manifiesto para protestar contra estas reformas, conocido como *Para hacernos valer*, del 11 de mayo. Muchísimas de éstas coinciden también en el pronunciamiento contra las leyes de supuesta defensa del maíz conocido como *Pronunciamiento a todos los pueblos y comunidades de Oaxaca, México y América Latina que siembran y comen maíz*, de agosto de este año. Conforme las adhesiones aumentan, el anuncio de una nueva coyuntura de articulación y cohesión en Oaxaca se vuelve más factible y más cercana ☞

Ramón Vera Herrera



NUEVA POLÍTICA PETROLERA AMENAZA A PUEBLOS AMAZONICOS DE ECUADOR

LAS DECISIONES DEL presidente Rafael Correa en relación a los yacimientos de petróleo en territorio indígena demuestran otra vez la poca voluntad del gobierno ecuatoriano para respetar los lineamientos constitucionales que protegen los derechos de los pueblos y la naturaleza. Las decisiones de Correa han generado una agria polémica incluso dentro del propio equipo de gobierno. Funcionarios de los ministerios de Justicia y Ambiente adelantaban gestiones desde el año 2008 para cumplir las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de los pueblos tagaeri, taromenane y kichwa de Sarayaku, mientras funcionarios de la Presidencia y el Ministerio de Recursos No Renovables daban a conocer, a finales de junio, los nuevos planes de licitación petrolera, echando por tierra el trabajo de Justicia y Ambiente.

La medida cautelar a favor de los tagaeri y taromenane, emitida en el 2006, es una de las varias medidas de protección que ha emitido la CIDH para proteger la vida y el territorio de los diversos pueblos indígenas ecuatorianos y que están en contradicción con la política extractivista del gobierno.

Además, las nuevas políticas de explotación petrolera contradicen medidas anteriores del propio presidente Correa, quien definió una política gubernamental de protección a los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario al crear, en 2008, el Plan de Remediación Ambiental y Social y el Plan de Medidas Cautelares, que buscaban implementar alternativas para cumplir con lo acordado entre el gobierno y la CIDH, en especial en lo relacionado con el respeto a los territorios en donde se ha evidenciado presencia de estos pueblos, exhortando a limitar la explotación de recursos petroleros y madereros.

El gobierno decidió convocar a licitación, el pasado 19 de junio, el denominado Campo Armadillo, en la provincia amazónica de Orellana, catalogado como un “campo marginal” cuya producción petrolera no es significativa y, aunque ayudará a la financiación del presupuesto nacional, no constituirá un alto ingreso financiero. Sin embargo, posee otro valor estratégico, su cercanía al Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra el campo Ishpingo-Tambococha-

Tiputini (ITT), la mayor reserva petrolera nacional, y motivo de la campaña internacional que busca compensaciones para no explotar el petróleo y conservar la alta biodiversidad de esta zona, además declarada intangible.

El Campo Armadillo, al estar cerca de Yasuní, serviría como infraestructura básica para la explotación del ITT y facilitaría la conexión de los oleoductos necesarios. En Campo Armadillo se han encontrado evidencias de asentamientos y tránsito de los pueblos amazónicos tagaeri y taromenane, aún en aislamiento voluntario. Correa se ha mostrado escéptico sobre la responsabilidad del Estado para proteger a estos pueblos, y ha hecho comentarios desafortunados sobre sus derechos, como en mayo del 2010, en una de sus cadenas radiales de los sábados: “Quieren que no se explote Armadillo porque se vio cerca a grupos no contactados. Dios no quiera que veamos no contactados en Quito y tengamos que desalojar Quito”.

La convocatoria a licitación del Campo Armadillo constituye prácticamente una sentencia de muerte para los tagaeri y taromenane. En Ecuador no es novedad la desaparición de pueblos indígenas a causa de las actividades petroleras, pues ya en la década de los 80 desaparecieron

los tetetes y sansahuaris, dos pueblos de la nororiental provincia de Sucumbíos, que sufrieron el embate de las actividades de la petrolera Texaco.

Para prevenir la desaparición de los tagaeri y taromenane, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó el 29 de marzo una demanda contra Correa por “genocidio”, aduciendo que su política extractivista provocará la muerte de los pueblos no contactados. La demanda presentada en un juzgado de la capital ecuatoriana fue desechada, aduciendo que no había señales de que el gobierno esté interviniendo en el Campo Armadillo. Sin embargo, la convocatoria a la licitación actual de Armadillo actualiza la demanda, que ahora ya se encuentra en la CIDH.

Mientras tanto, el proyecto de compensación por dejar bajo tierra el petróleo del ITT ha encontrado más obstáculos de lo esperado, y las negociaciones con los países que habían mostrado deseo de cooperar en la consolidación de una canasta de donantes parecen ir al fracaso a consecuencia de la ambigüedad del gobierno en su defensa de los derechos de la naturaleza, pues piensa ya en la explotación de este campo, adelantando la

implementación de campamentos base y negocia con autoridades locales la adhesión al proyecto. Por lo pronto, Correa anunció que, de no tener las compensaciones requeridas a fines del 2011, se podría iniciar la explotación de al menos una parte del campo ITT.

La CIDH también ha emitido medidas de protección que benefician al pueblo kichwa de Sarayaku, de Pastaza, en la Amazonia sur, que se resistió al ingreso de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó territorios de Sarayaku a CGC. La empresa efectuó prospección sísmica detonando pentolita. Más de mil 500 kilos del explosivo aún no han podido ser desactivados porque ni el Estado ni la empresa facilitan los recursos para hacerlo.

La oposición de Sarayaku y las medidas cautelares dictadas por la CIDH obligaron al Estado, a mediados del 2007, a cancelar la concesión; sin embargo, el año pasado el gobierno redefinió los bloques petroleros y de nuevo incluyó territorios de este pueblo para futuras convocatorias de explotación petrolera. Esta decisión reactivó la amenaza contra este pueblo, que nuevamente ha acudido a la CIDH, la cual recibió a

sus representantes el 6 de julio en audiencia general.

Los líderes kichwas relataron ante la CIDH cómo la lucha contra la petrolera impidió que, entre el 2002 y 2006, pudieran cultivar y realizar sus festividades tradicionales, por haberse dedicado a vigilar que CGC no siga con sus actividades de prospección petrolera. “Dejamos de cazar, dejamos de cultivar, dejamos de trabajar y pasamos hambre para proteger el territorio”, aseguró Patricia Gualinga.

El líder espiritual de Sarayaku, Sabino Gualinga, de 90 años, expresó en kichwa, ante la CIDH, que con las detonaciones de pentolita murieron árboles sagrados y desapareció la mitad de los seres espirituales de la selva: “Pasamos mucha tristeza y desgracia. En la selva viven seres ancestrales, los amos de la selva, y es una calamidad que desaparezcan, porque aparecerán enfermedades”.

Por su parte, el representante del gobierno nacional hizo una débil exposición de los avances realizados para proteger a Sarayaku y no pudo explicar la nueva política petrolera. La defensa del gobierno se basó en el testimonio de un indígena evangélico que afirmaba su complacencia por los adelantos dados por el gobierno y la necesidad del desarrollo. Ahora, la CIDH deberá decidir qué medidas implementar ☞

LA ANTESALA DEL cambio de ciclo de la cuenta larga del calendario maya está impregnada de un contexto adverso para el conjunto de los pueblos originarios de Guatemala, no solamente porque se ha hecho del 2012 un acontecimiento esotérico y mediático que no ha permitido discutir a profundidad la herencia cultural y la experiencia política de dichos pueblos, sino también, porque las condiciones de explotación, dominación y racismo siguen enraizadas al seno de la sociedad centroamericana.

Aunado a lo anterior se vislumbra el regreso, al frente del Estado guatemalteco, del general Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP), que de acuerdo a las encuestas tiene alrededor del 40 por ciento de intención de voto, una ventaja importante sobre sus competidores más cercanos que se encuentran entre el 17 y 8 por ciento de la preferencia electoral. Si el PP no obtiene el 50 por ciento, la segunda vuelta será el 6 de noviembre.

El militar que ahora domina la contienda electoral, fue conocido en los tiempos de guerra como el “Comandante Tito” y por haber dirigido los planes de contrainsurgencia en la tierras mayas del altiplano, los mismos territorios que conocieron las masacres, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y otros actos de barbarie que sólo pueden compararse con los actos de genocidio cometidos en Ruanda o Camboya.

Un ejemplo del pasado reciente puede verse el documental *Titular de hoy: Guatemala*, de Walhforss, donde también puede apreciarse el rol de dicho comandante.

Como las estructuras contrainsurgentes no fueron completamente desmanteladas con la firma de la paz en 1996, muchas de ellas se infiltraron en el crimen organizado, en el narcotráfico y en el contrabando. Estos “poderes ocultos” aprovechan las posiciones y redes que han construido en el sector público y privado, no solamente para enriquecerse sino también para cometer crímenes y extorsiones.

El amanecer y despertar político que durante siglos han buscado los pueblos mayas sigue siendo distante, y parece que un periodo oscuro y violento se avecina

La debilidad del sistema electoral y la volatilidad de los partidos políticos también ha sido aprovechada por estos sectores, las elecciones del 11 septiembre son un claro ejemplo: 20 partidos políticos han participado en la contienda electoral. Los cargos públicos se definen a través de relaciones clientelares, se desconocen las fuentes de financiamiento de los partidos políticos y la mayoría de ellos se han visto implicados en problemas de narcotráfico o contrabando.

En este sentido, la posible llegada al gobierno de Pérez Molina no cambia sustancialmente el sistema social y económico del país, pues al igual que el partido oficial, el Partido Patriota está estrechamente ligado al sector económico tradicional. Por un lado, varios de sus candidatos y principales financistas provienen de las filas de la oligarquía, los empresarios Ricardo Castillo, Dionisio Gutiérrez y el

EL REGRESO DE LOS MILITARES EN GUATEMALA

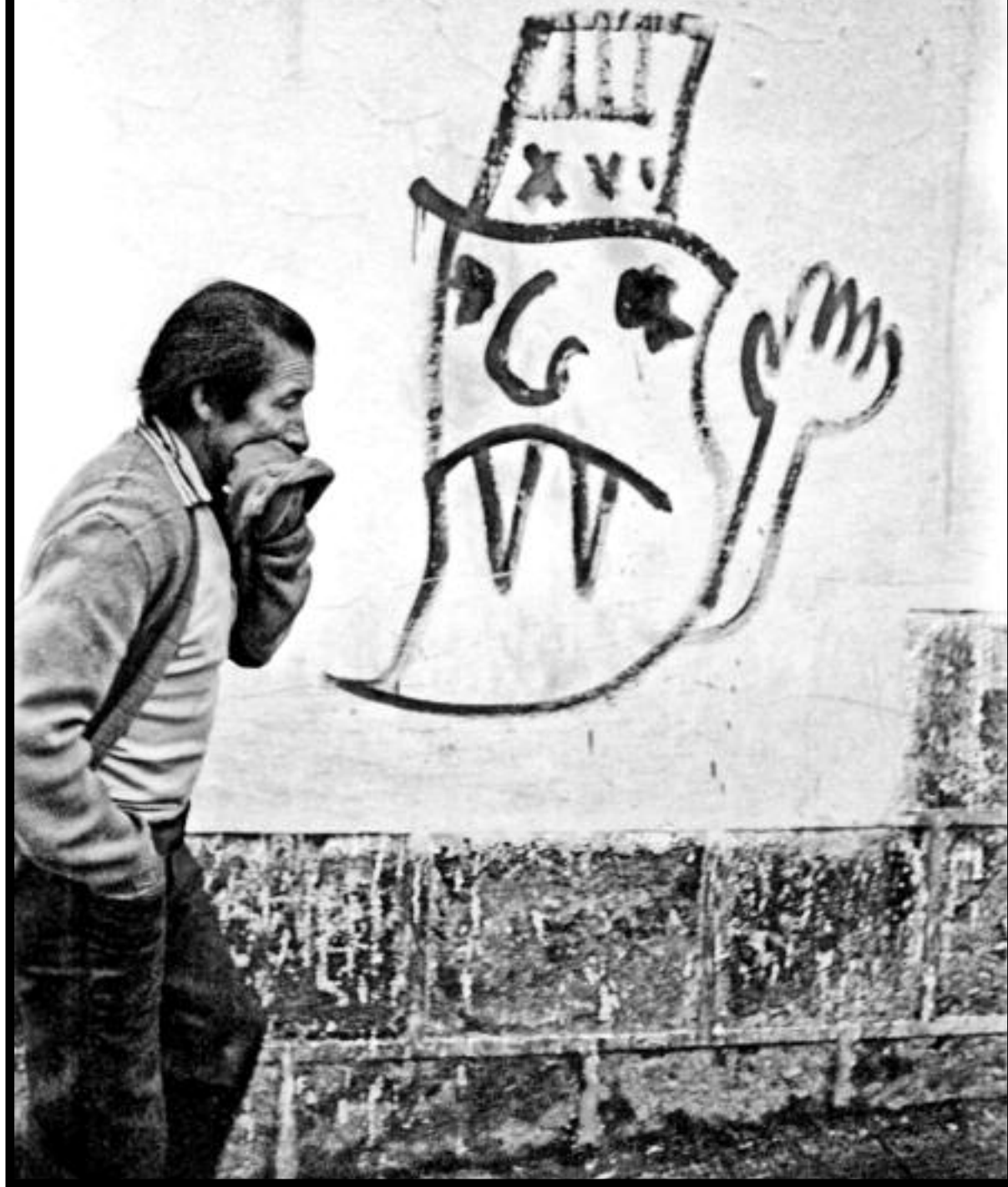


foto: HUGO CIFUENTES

Grupo Multi Inversiones, son un claro ejemplo. Por otro lado, la alianza entre la oligarquía y el sector militar no es nueva, inició con el golpe de Estado de 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz y se consolidó durante más de 36 años de conflicto armado interno.

Otra característica del sistema electoral y de partidos políticos es la fuerte presencia de partidos de derecha y su indefinición ideológica: tres partidos de derecha y uno de centro detentan cerca de 80 por ciento del poder legislativo (PP, GANA, LIDER y UNE), mientras que de 158 diputados únicamente tres pertenecen a partidos de izquierda (URNG y MNR).

Dado el deterioro de la izquierda guatemalteca en los últimos ocho años, diversas organizaciones sociales y partidos políticos lograron crear el Frente Amplio, con Rigoberta Menchú y el diputado independiente Aníbal García como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Sin embargo, las diferencias políticas e ideológicas han distanciado a ciertas organizaciones fundadoras, como El Frente Nacional de Lucha (FNL) y el Movimiento Tzuc Kim Pop.

Estos problemas distan del pragmatismo y oportunismo político de algunos partidos políticos considerados democráticos y de izquierda, como Encuentro por Guatemala (EG) de Nineth Montenegro, que lejos de construir un programa político y alianza con sectores sociales, prefirió aliarse con el partido liberal Visión con Valores (VIVA) del ex líder neo pentecostal Haroll Caballeros.

Un comportamiento que también es compartido por supuestos líderes sociales y de izquierda, que se reciclan cada período gubernamental. Los casos son innumerables. Dos de ellos pueden ser ilustrativos. Los primeros son Orlando Blanco y sus más cercanos colaboradores, que después de haber dirigido el Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), y trabajar con organizaciones de “víctimas” del conflicto armado, negociaron con el gobierno en turno para acceder a cargos públicos como secretarías y viceministerios. El segundo ejemplo lo encontramos en Edgar Ajcíp, líder maya que después de dirigir el programa asistencialista del Fondo Nacional para la Paz durante el gobierno anterior, cambia de partido político y ahora se postula como diputado nacional.

En este sentido, los Comités Cívicos siguen siendo una posibilidad real de organización política y social en Guatemala, puesto que son organizaciones políticas locales y regionales que pueden postular y elegir alcaldes municipales, el apoyo de las comunidades indígenas y populares es directo y lejos de buscar hacer de la política una profesión y una forma de ganarse la vida, son un medio para organizar y politizar a las comunidades y transformar la realidad en que viven.

El amanecer y despertar político que durante siglos han buscado los pueblos mayas sigue siendo distante, y parece que un periodo oscuro y violento se avecina. Por ello, el trabajo organizativo del pueblo, la búsqueda de unidad de las organizaciones populares y la superación del sectarismo de la izquierda tradicional y el culturalismo de gran parte de las organizaciones mayas del país, así como la incorporación de las nuevas generaciones de hombres y mujeres siguen siendo tareas pendientes ☞

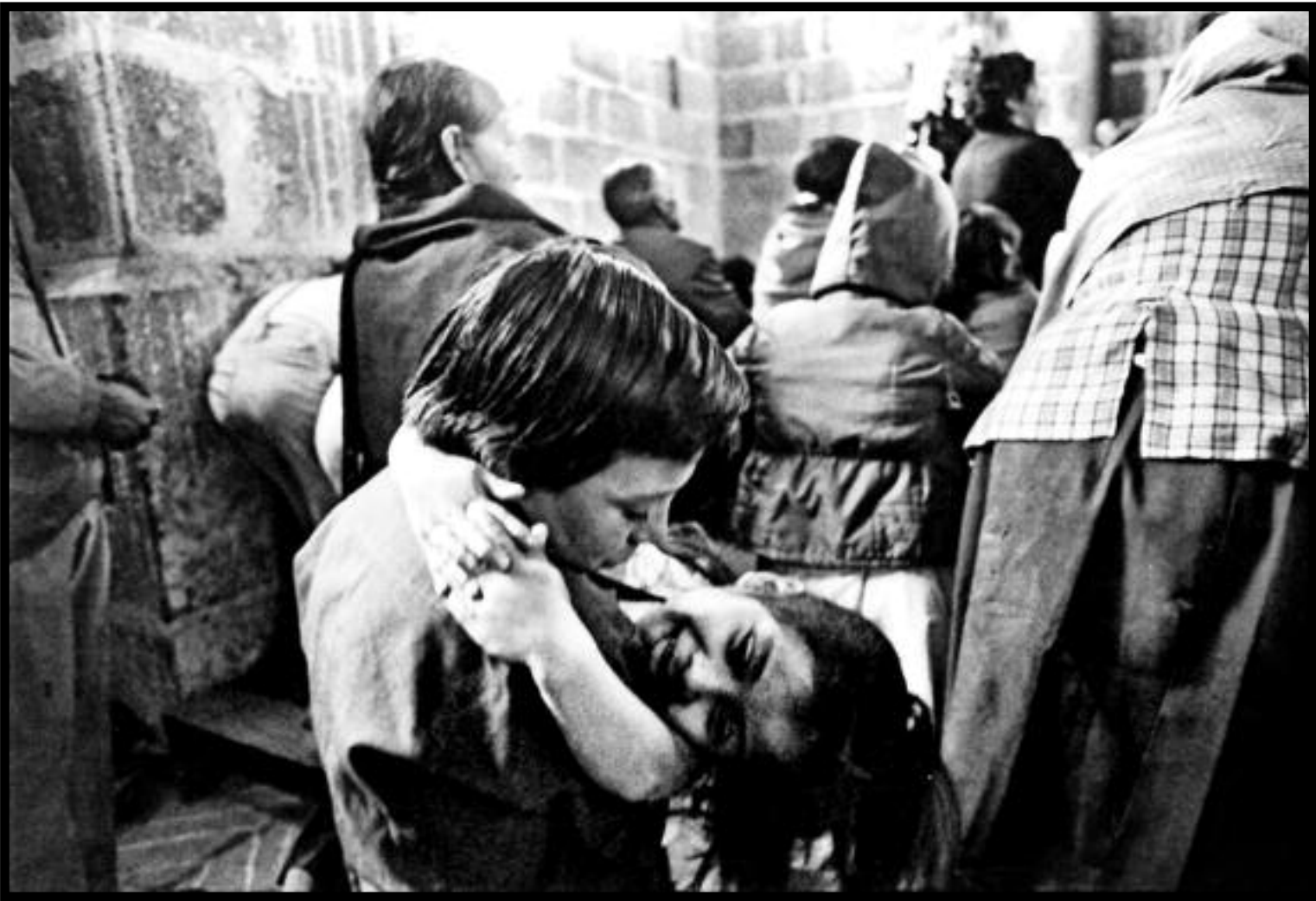


foto: HUGO CIFUENTES

APUNTES DEL CAMINO DEL PIMA

Keith Ekiss

Mitos de origen

Habitualmente no es humano uno de los padres.
Los hijos aparecen sin que se hable de sexo.

Dios crea del lodo a la mujer y al hombre.
Un hombre da a luz por el pene
lo que provoca un diluvio.

A otro le salen plumas pero no puede volar.
Hay estrellas porque alguien las escupió.

Las lágrimas de un niño forman un lago
donde el padre se ahoga.

El océano es una larga serpiente verde
enrollada en el mundo.

¿Cuáles fueron las primeras cosas en la Tierra?
La gobernadora, las hormigas negras.

El agua brotó de raíces y muñones de árbol.
La lluvia la trajo de vuelta. Luego fue blanca,
luego sangre.

Dios salvó a las aves y los animales.
Trepén las ramas, vivan en el agua.

Coyote se escabulló dentro de una flauta.
Un pájaro colgó su pico en el cielo.

Casas pima (ca. 1850)

La casa queda concluida cuando soporta el peso
de un hombre bailando en el techo en tiempo de cosechas.
El marco es de la madera de un álamo, porque
las garzas canturreaban ahí. Los soportes curvos de sauce,
se cubren de granos y paja,
bejuco y varas de maíz, cáscaras y desechos.
Entonces la morada se cubre y entierra.
El montículo parece una tumba.
¿Por qué una casa habría de ser más alta que un hombre?
Vientre redondo. Una cortina bordada es la puerta.
La gente duerme con la cabeza hacia el este.
Por la mañana siempre hay faena con los conejos.
Si un niño muere, el pima quema la casa
y construye otra.

El bastón calendario

Oído de Búho clavaba su bastón en el suelo
para registrar los acontecimientos
—cometa, solsticio, la vía del tren, un nacimiento.
Los invasores nunca quemaron las casas.
Nada de sábanas para los contagiados,
ni ametralladoras, ni tratados.

Los soldados ociosos mataban el tiempo
haciendo torneos con los nativos,
los caporales ganaban el esprint, los pima
las distancias largas.
Por muy rápido que corrieran los niños
jamás alcanzaban al río.

Qué se perdió, pescar con las manos,
las trenzas de bejuco en el río.
Qué queda, refranes para lamentar la partida:
Nos sobrepasaron los cuervos.

•◊



foto: HUGO CIFUENTES

•◊

Apuntes del camino del pima

Nadie me dijo que le pertenecía a la Tierra.

Cambié de tribu año tras año:
cheroki, cucapá, pueblo, mojave.

Que las nubes parezcan espíritus
no prueba ninguna religión.

El distante batir de tambores
era sólo truenos.

Las carretas formaron círculos
que se volvieron colonias.

Tostadas de canela, leche fría, blusas de domingo.

Un día empacamos nuestras pertenencias
y manejamos hasta que empezó a nevar.

En memoria de Jan de Vos

Mikeas Sánchez

Ahh! te' kaku'y myojnabiabü'is

mij' ngoso' yagbajk unej'se
yajk' tsutspabü'is paajk'paajk
jyo'kobyasen'omo
¿Tiya' jok'pa?

Ay! de la muerte que te cubre

los pies como a un niño desamparado
que te amamanta dulcemente
mientras esperas
¿Qué esperas?

Maka mini' te' kaku'y

y maka mbyare' mij' ün'güy'omo
maka mbyare' mij' dujk'ijs myuka'omora'm
jiksekande te' yüjk'pü tandan'ijs
makabü chyajme juchek' maka ngiae
jiksekande' ma'bü jambü'i mij' nüyi'
jiksekande' maka dyuki' tumü mabaxi'
te' mabaxi ja' tyujkübü tsayi'kam
te' mabaxi yagbajk'unes'ñye
y ñyagbajk'une mareke' mijtsi

Llegará la muerte

y te encontrará en tu cama
entre los hongos que habitan tu casa
o en el recuerdo de la mariposa negra
que anticipó tu ausencia
Entonces olvidarás tu nombre
y te volverás sueño
el sueño de una tarde no contemplada
o el sueño del niño desamparado que fuiste
y no has dejado de ser

| **Mikeas Sánchez**, poeta y narradora zoque nacida en
Tujsübajk (Río de Agua Verde), municipio de
Chapultenango, Chiapas, desde pequeña fue desplazada
por la erupción del volcán Chichonal. Autora del poemario
Tumjama Maka Mijtsi (*Y sabrás un día*, 2006) y ya conoci-
da por los lectores de *Ojarasca* (diciembre de 2007),
actualmente dirige una radio indígena en Copainalá.

página
final

| **Keith Ekiss**, poeta estadounidense, se dio a conocer con un memorable primer libro, *Pima Road Notebook*
(*Apuntes del camino del pima*, Western Michigan University, 2010). Entre recuerdos familiares y zambu-
lidas profundas en las praderas y el desierto, destila con sobriedad la esencia de ese camino a través de
grandes extensiones en el sur de Estados Unidos. Históricamente los pima, hay que recordar, se aliaron
con los conquistadores, en particular para combatir a sus vecinos apaches. (Traducción del inglés: **HB**).